

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TUNJA**



SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: JULIO ENRIQUE MOGOLLÓN GONZÁLEZ

Aprobado en Acta No.28

Tunja, veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021)

I-. OBJETO POR DECIDIR

El recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la providencia del **11 de febrero de 2021**, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja dentro del proceso en referencia.

II-. ANTECEDENTES

- **BIVIANA CAROLINA, GLORIA MILENA y SANDRA PATRICIA CORREDOR CORREDOR** solicitaron se libre mandamiento de pago a su favor, y en contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA**, por las mesadas causadas del 12 de julio de 2002 al 2 de abril de 2017; costas; intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia; intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993. Acorde a los fallos judiciales, proferidos dentro del proceso N° 15001310500120060014000.
- Indicaron que, su señora madre **GLORIA ESPERANZA CORREDOR CORREDOR** presentó demanda en contra de la citada administradora, con el propósito de que se reconozca a su favor pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del afiliado **FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ**.
- El 8 de noviembre de 2017 se profirió sentencia, en donde la Corte Suprema de Justicia no casó la decisión que condenó al pago de la pensión de sobrevivientes reclamada, a partir del 12 de julio de 2002.

- GLORIA ESPERANZA CORREDOR CORREDOR falleció el 2 de abril de 2017.
- Ante el fallecimiento de la causante, sus hijas adelantaron trámite sucesoral en la Notaria Única del Circuito de Toca, con lo que acreditan el derecho al pago de las condenas.
- Dentro del trabajo de partición, se adjudicó a cada una de las demandantes el 33.33% del aporte pensional no cobrado o saldos que se encuentren en PORVENIR SA. (*Archivo 1*)

III-. PROVIDENCIA RECURRIDA (*Archivo 12*)

La del **11 de febrero de 2021** en donde el a-quo negó el mandamiento de pago, conforme a los siguientes razonamientos:

- Los contratos de mandato fueron otorgados para el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes, sin que dentro del trámite ejecutivo procedan pretensiones de reconocimiento ni condena.
- En las pretensiones no se incluye el porcentaje de los incrementos legales para cada año, situación frente a la cual, se debe pronunciar la parte demandada.
- Dentro de la escritura pública de liquidación de la sucesión, no se incluyeron como activos de la masa sucesoral los valores que ahora se pretenden ejecutar, y que derivan del proceso judicial citado.
- A la fecha, no se conoce el porcentaje o valor que corresponde a cada heredero, por este concepto.

IV-. RECURSO INTERPUESTO.

Contra la anterior decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Señala que:

- El título ejecutivo, está conformado por las sentencias judiciales proferidas dentro de este asunto, contando con los elementos necesarios para librar mandamiento de pago, al ser expreso, claro y exigible.
- En el contrato de mandato no solo se establece el reconocimiento, sino el pago del derecho que nace de la sentencia judicial que se pretende ejecutar.
- Si bien, existió una omisión al no relacionar el porcentaje del incremento anual que se decreta en la pensión, el mismo no afecta la operación aritmética realizada.
- En la liquidación de la sucesión de la causante GLORIA ESPERANZA CORREDOR, se consignó un valor en el activo partidas quinta y sexta, el cual es tentativo, pues solo a través del proceso ejecutivo laboral se pueden determinar con exactitud las sumas adeudadas.
- Dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante, las partidas quinta y sexta se distribuyeron a sus hijas, correspondiendo a cada una de ellas un 33.3%, lo que conlleva a que dentro del proceso ejecutivo se reconozca el derecho que tienen como sucesoras procesales de las sentencias que se pretenden ejecutar. (*Archivo 13*)

En providencia de fecha **25 de marzo de 2021** el a-quo negó la reposición, y concedió el recurso de apelación. (*Archivo 16*)

V-. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

La parte ejecutante los presentó de forma extemporánea.

VI-. RAZONAMIENTOS QUE FUNDAMENTAN LA CONCLUSIÓN.

De conformidad con lo establecido en el numeral 8° del artículo 65 del CPT y SS, el auto que decide sobre el mandamiento de pago es apelable, por tal razón, le corresponde a la Sala estudiar el presente asunto.

El artículo 100 del C.P. L señala que *será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.* (Subraya fuera de texto)

A su vez el artículo 422 del CGP prescribe; “*Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él (..)*”.

En el presente caso **BIVIANA CAROLINA, GLORIA MILENA y SANDRA PATRICIA CORREDOR CORREDOR** solicitan se libre mandamiento de pago a su favor, y en contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA**, por las sumas de dinero provenientes del reconocimiento efectuado, en los fallos judiciales proferidos dentro del proceso N° **15001310500120060014000**, así: mesadas causadas **\$116.965.133**; costas \$1.562.484; intereses moratorios; intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, costas y agencias en derecho. Tal petición, la realizan en calidad de herederas de GLORIA ESPERANZA CORREDOR CORREDOR, quien actuaba como demandante en el proceso citado.

Ahora bien, al verificar las sentencias proferidas dentro del referido proceso, se encuentra que allí se reconoció pensión de sobrevivientes a favor de GLORIA ESPERANZA CORREDOR CORREDOR, como beneficiaria de FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ CORREDOR, a partir del 12 de julio de 2002; proceso ordinario que culminó con la decisión emanada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 8 de noviembre de 2017, la que fue notificada por edicto el 23 de noviembre de la misma data. (Archivo 3)

Así mismo, se encuentra la escritura pública N°34 de fecha 1 de marzo de 2019, emanada de la Notaría Única del Circulo de Toca Boyacá, en donde se registra la liquidación de la sucesión de la causante GLORIA ESPERANZA CORREDOR CORREDOR, y en donde figuran como herederas **BIVIANA CAROLINA,**

GLORIA MILENA y SANDRA PATRICIA CORREDOR CORREDOR. Allí, para lo que interesa al presente asunto, dentro de los activos se incluyeron:

*“PARTIDA QUINTA: Aporte pensional no cobrado o devolución de saldos de la causante, con corte a agosto de 2018, en el fondo de pensiones Porvenir.....
Se avalúa esta partida en la suma de \$9.345.047,00
PARTIDA SEXTA: Bono pensional no cobrado o devolución de saldos de la causante, no cobrados con corte a agosto de 2018. EL BONO SE ENCUENTRA REPORTADO EN EL FONDO DE PENSIONES PORVENIR
Se avalúa esta partida en la suma de\$32.803.751.*

Igualmente se observa, que los activos relacionados en las citadas partidas, fueron adjudicados a cada una de las herederas en un porcentaje del 33.3%, como se indicó en las respectivas hijuelas. (Archivo 4)

Finalmente, al revisar los contratos de mandato suscritos por cada una de las prenombradas, se encuentra que allí como objeto de los mismos se plasmó:

“PRIMERA: OBJETO: EL MANDATARIO se obliga con EL MANDANTE a la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS, para obtener el reconocimiento y pago de PENSIONES – DE SOBREVIVIENTES a favor (...) en su calidad de Hija de la señora GLORIA ESPERANZA CORREDOR CORREDOR, (q.e.p.d.) beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del causante FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ CORREDOR (q.e.p.d.)” (Archivo 1).

Conforme a los documentos reseñados en precedencia, observa la Sala que efectivamente como lo indicó el a-quo no es posible librar el mandamiento de pago peticionado. Nótese que, del escrito de demanda se vislumbra que se pretende el cobro de los conceptos reconocidos en sentencia judicial, y frente a los cuales las ejecutantes se arrogan derechos en calidad de herederas de la causante, situación que en este caso no se encuentra demostrada.

Lo anterior, pues si bien se aportan las sentencias judiciales y el acto notarial de sucesión, no se puede indicar que los derechos reconocidos en el fallo judicial (o por

lo menos el derecho litigioso) fueran asignados a favor de las actoras en la liquidación de la sucesión. Así no quedó plasmado en las partidas correspondientes, en donde se hace alusión a conceptos y valores distintos a los aquí ejecutados.

Por tanto, no se observa la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor de las demandantes, en este caso, se trata de la ejecución de un título complejo, el que está conformado por una serie de documentos, que deben ser presentados a fin de librar el correspondiente mandamiento de pago, y en donde se debe indicar de forma clara la obligación que se está ejecutando.

Al respecto, por vía jurisprudencial se ha señalado¹:

4.2. También se colige, del precedente transcrito, que en estos casos, al configurarse la existencia de un título de carácter complejo, será imprescindible aportar con la demanda, la totalidad de los documentos que lo componen, de cuyo conjunto, no sobra insistir, se desprenda una obligación clara, expresa y exigible, en las voces del artículo 422 del Código General del Proceso, citado.

5. Siendo el título ejecutivo presupuesto de cualquier acción de esta naturaleza², se explica el porqué, al momento de impetrarse el libelo, deba éste reunir la totalidad de los requisitos que la ley, para su eficacia y validez, prevé.

Esa y no otra es la conclusión que emerge del contenido del artículo 430 del Código General del Proceso, a cuyo tenor

“Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida (...)”.

Lo anteriormente razonado es confirmado por Alsina, quien anota:

“De la autonomía de la acción ejecutiva resulta que el título ejecutivo es suficiente por sí mismo para autorizar el procedimiento de ejecución. Nada debe investigar el juez que no conste en el título mismo. Pero por esa razón, y como consecuencia lógica, es necesario que el título sea bastante por sí mismo, es decir, que debe reunir todos los elementos para actuar como título ejecutivo”³.

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Radicación STC18085-2017. M.P. Luis Armado Tolosa Villabona.

² COUTURE, Eduardo, J. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. 1958. Pág. 447.

³ ALSINA, Hugo. *Juicios Ejecutivos y de Apremio, Medidas Precautorias y Tercerías*. Tomo II. Pág. 590. 2002.

En consecuencia, y al no encontrarse debidamente conformado el título ejecutivo, se confirmará la decisión de primer grado.

COSTAS. Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría devuélvase el expediente al Juzgado de origen, dejando las constancias necesarias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados

JULIO ENRIQUE MOGOLLÓN GONZÁLEZ

FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ

MARÍA ISBELIA FONSECA GONZÁLEZ
Con impedimento

Firmado Por:

JULIO ENRIQUE MOGOLLON GONZALEZ
MAGISTRADO
TRIBUNAL 002 SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE TUNJA-BOYACA

FANNY ELIZABETH ROBLES MARTINEZ
MAGISTRADA
TRIBUNAL 003 SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE TUNJA-BOYACA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario
2364/12

Código de verificación:

fef6632348ceac2e146b1bca5b23d1036da4e45e187cde6fa36c4f3c0c128530

Documento generado en 29/07/2021 02:30:27 PM